

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Bogotá, D.C., doce (12) de mayo de dos mil veinte (2020)

Magistrado ponente:	FRANKLIN PÉREZ CAMARGO
NATURALEZA:	CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
RADICACIÓN:	25000-23-15-000-2020-01298-00
ASUNTO:	No avoca conocimiento de control inmediato de legalidad de la Resolución No. 353 del 16 de marzo de 2020 expedido por la Personería de Bogotá.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 136 del CPACA¹ y el artículo 20 de la Ley 137 de 1994², se estudia por parte del Despacho, si se avoca o no el control inmediato de legalidad de la Resolución No. 353 del 16 de marzo de 2020 expedido por la Personería de Bogotá, *“por medio de la cual se modifica transitoriamente la jornada laboral en la Personería de Bogotá D.C.”*; repartido al suscrito Magistrado.

Lo anterior conforme con lo preceptuado en el Acuerdo número PCSJA20-11529 del 25 de marzo de 2020, emanado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que exceptuó de la suspensión de términos adoptada en los acuerdos PCSJA20-11517 y 11526 de marzo de 2020, las actuaciones que adelanten el Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos con ocasión del control inmediato de legalidad.

CONSIDERACIONES:

¹ **ARTÍCULO 136. CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD.** Las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción, tendrán un control inmediato de legalidad, ejercido por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en el lugar donde se expidan, si se tratare de entidades territoriales, o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales, de acuerdo con las reglas de competencia establecidas en este Código. (...)

² **Artículo 20.** Control de legalidad. Las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción, tendrán un control inmediato de legalidad, ejercido por la autoridad de lo contencioso administrativo en el lugar donde se expidan si se tratare de entidades territoriales o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales. Las autoridades competentes que los expidan enviarán los actos administrativos a la jurisdicción contencioso-administrativa indicada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedición.

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud - OMS, calificó el brote de COVID-19 (Coronavirus) como una pandemia, por lo que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Resolución 385 de 12 de marzo de 2020, declaró «la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020», y ordenó a los jefes y representantes legales de entidades públicas y privadas, adoptar las medidas de prevención y control para evitar la propagación del COVID19 (Coronavirus).

Mediante Decreto Nacional No. 417 del 17 de marzo de 2020, el presidente de la República declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término de treinta (30) días calendario.

El artículo 215 de la Constitución Política autoriza al presidente de la República a declarar el Estado de Emergencia cuando se presenten circunstancias distintas a las previstas en los artículos 212³ y 213⁴ de la Constitución, que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social, ecológico del país, o constituyan grave calamidad pública.

Tal y como se hizo referencia anteriormente, tanto el artículo 20 de la Ley 137 de 1994 y el artículo 136 de la Ley 1437 de 2011 establecen la competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que en este caso recae sobre los Tribunales Administrativos en única instancia en virtud de lo dispuesto en el numeral 14 del artículo 151 del CPACA; sobre el control inmediato de legalidad de los actos de carácter general que sean proferidos en ejercicio de la función administrativa **durante los Estados de Excepción y como desarrollo de los decretos legislativos, que fueron dictados por entidades territoriales departamentales y municipales.**

Por ende, solo es de conocimiento por parte de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo aquellos decretos que se dicten durante el

³ ARTICULO 212. El Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el Estado de Guerra Exterior. Mediante tal declaración, el Gobierno tendrá las facultades estrictamente necesarias para repeler la agresión, defender la soberanía, atender los requerimientos de la guerra, y procurar el restablecimiento de la normalidad. (...)

⁴ ARTICULO 213. En caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía, el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el Estado de Conmoción Interior, en toda la República o parte de ella, por término no mayor de noventa días, prorrogable hasta por dos períodos iguales, el segundo de los cuales requiere concepto previo y favorable del Senado de la República.

estado de excepción y como desarrollo de los decretos legislativos dictados en este periodo.

La Resolución No. 353 del del 16 de marzo de 2020 proferiao por la Personería de Bogotá D.C tiene como sustento la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social; las circulares 017 del 24 de febrero de 2020 y 018 del 10 de marzo del 2020 proferidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio del Trabajo y el Departamento Administrativo de la Función Pública, mediante los cuales se tomaron medidas preventivas para enfrentar el contagio y acciones sanitarias aplicables principalmente a los ambientes laborales.

Además, se hizo referencia a la directiva 02 del 12 de marzo de 2020 expedida por el presidente de la República, mediante la cual se imparten directrices para atender la contingencia generada por el COVID-19 y para garantizar la prestación del servicio público.

Por consiguiente, no resulta procedente en este caso adelantar el control inmediato de legalidad de la Resolución No. 353 del 16 de marzo 2020, de acuerdo con lo establecido en los artículos 20 de la Ley 137 de 1994 y 136 de la Ley 1437 de 2011, ya que este fue proferido con anterioridad a la declaratoria de estado de emergencia económica, social y ecológica contenida en el Decreto 417 de 2020, y además, el control de legalidad se efectúa sobre los actos de las entidades territoriales en los términos del artículo 286⁵ de la Constitución Política, y el acto administrativo recibido es firmado por una autoridad distinta al alcalde del Distrito Capital de Bogotá, esto es **la Personería de Bogotá, que es un órgano de control**; por lo que la competencia es especial sobre actos de los gobernadores y alcaldes o autoridades territoriales.

El Módulo de Estructura del Estado Constitucional del área constitucional de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla⁶ precisó que la Constitución Política define la estructura del Estado, que los órganos de control están integrados por el Ministerio Público, el cual está integrado por la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, los procuradores delegados y agentes del Ministerio Público ante las

⁵ ARTICULO 286. Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas. La ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias que se constituyan en los términos de la Constitución y de la ley

⁶ Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, Estructura del Estado Constitucional. Autora: Rocío Araújo. 2007. Pag. 30. Consultado en línea el 8 de mayo de 2020.

<https://escuelajudicial.ramajudicial.gov.co/tree/content/pdf/a2/3.pdf>

autoridades jurisdiccionales, por los **personeros municipales** y los demás funcionarios y funcionarias que determine la Ley, a quienes, al tenor de lo dispuesto en el artículo 118⁷ de la Constitución Nacional, les corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas.

Por lo anterior no es competencia de esta corporación el estudio de una resolución promulgada por un organismo de control, en tanto este no es una entidad territorial que haga parte de la rama ejecutiva del poder público.

Con todo, cabe resaltar que la improcedencia del control inmediato de legalidad (que es automático e integral) sobre este decreto, no comporta el carácter de cosa juzgada de la presente decisión, pues no se predicen los efectos procesales de dicha figura en cuanto a su inmutabilidad, vinculación y definición, y por tanto será pasible de control judicial ante esta Jurisdicción, conforme a los otros medios de control (observaciones del señor Gobernador, nulidad, nulidad y restablecimiento del derecho) en aplicación el procedimiento reglado en la Ley 1437 de 2011 y demás normas concordantes.

Así las cosas, al no cumplirse con los requisitos mínimos necesarios para iniciar el proceso de control automático de legalidad, no se avocará conocimiento en el asunto de la referencia.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

PRIMERO: NO AVOCAR conocimiento de control inmediato de legalidad de la Resolución No. 353 del 16 de marzo de 2020, proferido por la Personera de Bogotá D.C., por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: La presente decisión no hace tránsito a cosa juzgada.

TERCERO: NOTIFICAR esta decisión a la Alcaldía del Distrito Capital de Bogotá D.C., y a la Personería de Bogotá D.C., a través de la Secretaría de la Sección y por

⁷ ARTICULO 117. El Ministerio Público y la Contraloría General de la República son órganos de control.

ARTICULO 118. El Ministerio Público será ejercido por el Procurador General de la Nación, por el Defensor del Pueblo, por los procuradores delegados y los agentes del ministerio público, ante las autoridades jurisdiccionales, por los personeros municipales y por los demás funcionarios que determine la ley. Al Ministerio Público corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas.

el medio más expedito y eficiente, considerando el buzón de notificaciones judiciales previsto por la autoridad Municipal y la entidad. Autoridades que **DEBERÁN PUBLICAR** igualmente en su página web la presente decisión. Así mismo **NOTIFICAR** al agente del Ministerio Público delegado ante este despacho.

CUARTO: COMUNICAR la presente decisión a través de la Secretaría de la Sección, mediante un aviso en la página web de la rama judicial: <https://www.ramajudicial.gov.co/web/secretaria-tribunal-administrativo-decundinamarca/>.

QUINTA: Una vez ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE



FRANKLIN PÉREZ CAMARGO
MAGISTRADO